
AMÉRICA LATINA: LAS DESVENTURAS DEL DISCURSO POLÍTICO

José Miguel Candia

El cuadro económico adverso y accidentado de los últimos diez años que dio lugar a la definición común de crisis, no sólo sirvió para cuestionar los patrones de desarrollo sobre los que habían marchado los países de la región durante casi cuarenta años. El derrumbe material puso fin también a algunas de las certezas sobre las que cabalgó el discurso político por más de cuatro décadas. Ciertos paradigmas parecen estar definitivamente cuestionados, al menos en los términos en los que se recurría a ellos con la insistencia propia de los lugares comunes. Palabras mágicas como “crecimiento sostenido”, “soberanía”, “justicia social” o “participación popular”, están siendo drásticamente reformuladas o sustituidas al amparo del brusco reordenamiento de la economía mundial y de la construcción de un nuevo orden internacional. El debilitamiento de los contrapesos ideológicos dejó en manos de los centros académicos neoconservadores, la facultad de gestar referentes ideológicos capaces de explicar el proceso de reestructuración económica sin acudir a los conceptos que habían sido acuñados a lo largo de la primera etapa del proceso de industrialización y del llamado crecimiento “hacia adentro”.¹

Se abre, de esta forma, un periodo de elaboración de nuevos paradigmas. La tradición dominante en el discurso político latinoamericano a lo largo del último medio siglo se levantó sobre tres componentes princi-

¹ Fernando Calderón y Mario dos Santos, “Ciencias Sociales, crisis y requerimientos de nuevos paradigmas en la relación Estado-Sociedad-Economía”, *Los actores socioeconómicos del ajuste estructural*, vol. 3, Buenos Aires, CLACSO, 1988.

pales: el “nacionalismo”, como un medio legítimo de afirmación de intereses y valores propios frente a las potencias dominantes; el “desarrollo económico”, entendido como un proceso de crecimiento a través del cual se buscó eliminar los últimos vestigios del antiguo esquema oligárquico y entrar de lleno en un modelo cuyo eje de acumulación serían las actividades urbanas productoras de bienes manufacturados y los servicios financieros y de apoyo vinculados a la industria;² la “justicia social”, otro referente constante del discurso ideológico y de la prédica cotidiana de las fuerzas políticas latinoamericanas. La idea de justicia estaba asociada a una distribución equitativa de la riqueza mientras que en la esfera propiamente política se la vinculó a la organización y participación de las clases subalternas en el marco de vastos movimientos po-liclasistas.

De esta manera quedó consagrado el cuerpo ideológico que le dio consistencia y arraigo al discurso “nacional-popular”. El mayor o menor protagonismo de los trabajadores urbanos y de sectores sociales pobres del campo y la ciudad le permitió adquirir en cada caso un énfasis distinto a cada uno de sus componentes. El antimperialismo, el impulso a la industria y la adopción de medidas proteccionistas, y hasta cierto “anticapitalismo” —a veces identificado sólo como una visión primaria del repudio a los ricos y a las antiguas clases dominantes— fueron elementos que, de diversas maneras y con distinta gravitación, estuvieron presentes en el nacionalismo popular. Las experiencias conocidas son cambiantes en este sentido y por lo general el grado de organización y autonomía obrera o la relevancia que adquirió la participación de sectores campesinos o de grupos empresariales, contribuyó a fortalecer de manera particular a alguna de las ideas rectoras en torno de las cuales se estructuró el discurso.³

También la concepción del Estado, y de la gestión pública en general, se tiñó de estos valores. La participación estatal en la economía no sólo fue vista como un valioso removedor de antiguos escollos, era además un mecanismo de castigo al “rentismo”, de estímulo a la nueva burguesía y un instrumento idóneo para asignar recursos y distribuir la riqueza. Se cristalizó así una idea positiva de la cuestión estatal.

² Marcelo Cavarozzi, *Elementos para una caracterización del capitalismo oligárquico*, Buenos Aires, núm. 3, Documento CEDES/CLACSO, 1978.

³ Marcelo Cavarozzi, *Populismos y partidos de clase media*, Buenos Aires, Documento CEDES/CLACSO, núm. 3, 1978.

La tarea histórica de neutralizar a los antiguos grupos dominantes y abrir espacios a los sectores sociales emergentes, requería del apoyo activo de las clases subalternas y en general de los habitantes pobres del campo y la ciudad. El sindicalismo fue entonces el medio a través del cual no sólo se expresaron los reclamos económicos más importantes, se constituyó también en la vía que permitió materializar el apoyo político de los trabajadores al nuevo bloque de poder.⁴ El acelerado proceso de afiliación gremial y la conformación de grandes centrales obreras que se sumaron a los movimientos nacionales de raíz populista fueron rasgos distintivos de esta época.⁵

Este modelo de desarrollo perfiló también a determinado tipo de actor político y privilegió ciertos espacios para plantear y dirimir controversias y canalizar las demandas sociales. Dirigentes surgidos en las agrupaciones sindicales o formados en las estructuras de los partidos o movimientos, así como exmilitares y abogados, nutrieron el grueso de las clases políticas latinoamericanas. El centro de las preocupaciones fue puesto en la armonización de intereses y en la negociación de las diferencias con el propósito de poner a salvo la alianza Estado-sindicatos-empresarios y bloquear cualquier intento restaurador por parte de las antiguas clases dominantes. De esta manera, las soluciones apuntaban más a lograr una canalización oportuna de las demandas a través de las vías institucionales que a la búsqueda de una administración más ordenada o de mayor eficiencia productiva.

El clientelismo político, la organización corporativa y el carácter tutelar de muchas disposiciones de gobierno, aseguraron la movilización de los grupos sociales populares para defender conquistas económicas o implantar medidas tendientes a eliminar los privilegios que pudieran favorecer a los sectores patronales no integrados al bloque nacional-popular.⁶ Al mismo tiempo, el funcionamiento "vertical" de las jerarquías políticas y administrativas y la formación de una cultura de tintes personalistas en las que se sobrevaloraban los liderazgos —desde el propio

⁴ Elizabeth Jelin, *Orientaciones e ideologías obreras en América Latina*, Buenos Aires, Estudios Sociales, núm. 3, CEDES, 1978.

⁵ Francisco Zapata, "El Sindicalismo en América Latina", revista *Trabajo* 3/4, México, UAM-Azcapotzalco, 1990.

⁶ Teresa Incháustegui, "Desgate del Sindicalismo de la Revolución", revista *Trabajo* 3/4, *op. cit.*

presidente hasta dirigentes sindicales o caudillos políticos regionales—, permitía castigar o aislar cualquier intento de autonomía que pusiera en riesgo la permanencia de los otros aliados en el bloque social que le daba sustento al conglomerado nacional-popular.

El énfasis distribucionista se correspondió con una época en que las condiciones internacionales y el comportamiento de las economías locales permitió atender el reclamo social sin afectar de manera grave el desarrollo de la industria y la preservación del aparato productivo. La sanción de códigos laborales avanzados y el fuerte protagonismo sindical, son signos propios de este periodo. El marco normativo que se estableció era la expresión de una determinada correlación de fuerzas y del interés del Estado por consolidar la alianza sobre la que se construía su legitimidad.

La soberanía nacional fue concebida como una extensión del crecimiento de la industria y de la participación del Estado en la economía. Las empresas públicas y las dependencias gubernamentales, que se multiplicaron durante cuatro décadas en actividades productivas relevantes como las industrias del petróleo y la minería, formaban parte de un patrimonio estatal que se entendía innegociable. Eran como casamatas destinadas a dificultar el ingreso del capital externo en áreas estratégicas y generar insumos baratos para promover el desarrollo de una clase empresarial propia.

Nacionalismo, desarrollo económico y justicia social eran consignas comunes para el Estado, los sindicatos y las capas empresariales que se consolidaron como sector al calor del proceso de industrialización, del crecimiento de las actividades urbanas y de la modernización del campo.

Fue precisamente el agotamiento de este modelo el que arrastró toda una concepción de la política y de la misma gestión de las cuestiones públicas. La crisis, más que el descontrol transitorio de algunas variables macroeconómicas como las tasas de inflación, el gasto fiscal o el sobreendeudamiento externo, expresa el fin del esquema de crecimiento protegido en los países capitalistas periféricos.⁷

La formulación de una estrategia de desarrollo basada en la apertura comercial y la promoción de las exportaciones no tradicionales impuso

⁷ Carlos Ominami, "América Latina en la reestructuración industrial mundial", *Industria, Estado y sociedad*, Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1989.

la necesidad de modernizar también el discurso y la práctica política. Los paradigmas que habían permitido explicar desde la concepción “nacional-popular” el devenir de las naciones latinoamericanas resultaban ahora inadecuados para conceptualizar la realidad y convocar a la sociedad con el fin de impulsar un nuevo proyecto histórico cuyos pilares son la reestructuración de la economía y la reforma del Estado.

La muda ideológica fue rápida y estuvo a cargo de una élite intelectual en la que milita un grupo destacado de dirigentes de nuevo tipo formados en las principales escuelas del pensamiento neoliberal y provenientes de una generación menos comprometida con el diseño de las formas estatales que acompañaron al modelo de economía “popular”. El grupo de funcionarios responsables de fijar el nuevo rumbo se nutrió también de antiguos cuadros de la burocracia política, muchos de ellos incorporados de manera súbita y a contrapelo de sus propias historias al flamante proyecto modernizador.

Las formas corporativas tradicionales –fuente de legitimidad del Estado “nacional-popular”– y las estructuras “movimientistas” que adoptó la política dejaron de ser funciones. Los sindicatos se habían acostumbrado a participar en la definición de las medidas económicas y a reclamar una porción de los cargos públicos. Ambas demandas resultan conflictivas para los programas de ajuste que exigen disciplina social y menor injerencia política.⁸

Los antiguos canales de participación social tendían a mezclar las reivindicaciones gremiales con los requerimientos propiamente políticos. Los sindicatos, las organizaciones patronales aliadas y los grupos populares o campesinos eran simultáneamente la expresión de intereses sectoriales y a la vez partes constitutivas de los movimientos políticos mayoritarios.

Modificar el antiguo marco institucional y definir reglas del juego que acotaran la participación popular y establecieran caminos distintos para lo “corporativo” y lo “político”, fue otra de las tareas de la élite modernizadora. Despolitizar lo social y desalentar la movilización popular son los mecanismos a los que se recurre para debilitar los reclamos y desarticular las demandas. Con criterios “asistencialistas” se definieron programas específicos de atención a los grupos más pobres y menos es-

⁸ Alberto Aziz N., *El Estado mexicano y la CTM*, México, Ediciones de la Casa Chata, 1989.

estructurados de la fuerza de trabajo y se acorraló a las dirigencias obreras con una legislación flexible que incorpora, entre otras disposiciones, cláusulas de afiliación voluntaria, reducción de las prestaciones comunes y acuerdos por empresa no negociables para otros establecimientos si no se presentan condiciones de productividad similares.⁹

No sólo se modificó la retórica, también los ámbitos en los que se genera la política cambiaron, se impuso la idea del *bunker* intelectual. Tecnócratas de reciente arribo a la función pública suplieron a las anteriores instancias de carácter más plural y con intereses que estaban más orientados a satisfacer las peticiones de los sectores aliados que a buscar la eficiencia del sistema.

En los gabinetes económicos y desde ciertos espacios del mundo intelectual y académico se le dio forma al nuevo discurso, y aunque se encuentra en una fase de elaboración muestra algunos perfiles claramente estructurados.

Globalización, apertura comercial y modernización se constituyeron en los referentes conceptuales más importantes de la propuesta ideológica que busca legitimidad para el proceso de reestructuración capitalista.¹⁰ La participación de los actores sociales ya no se define a partir de los espacios que abría un Estado generoso y protector, el lugar que deberán ocupar ahora trabajadores y empresarios está determinado por criterios “productivistas” más que políticos. Otros factores como la capacidad de adecuación a la apertura comercial, la modernización de las empresas y la calificación y adaptabilidad de los trabajadores, son los que permiten acceder al reconocimiento gubernamental y a la obtención de los favores con los que se premia a los más disciplinados.

El proyecto neoliberal supo envolverse de una aureola “societal” que encontró su justificación más inmediata en la crítica al Estado “interventor” y a la administración deficitaria de los organismos públicos. Esta percepción, casi de sentido común, fue un argumento sólido a la hora de impulsar las privatizaciones y la reducción de los espacios estatales.¹¹

La satanización de la gestión pública a partir de criterios eficientistas

⁹ Alfredo Acle Tomasini, “Los contratos del futuro”, *El Financiero*, México, 4 de junio de 1990.

¹⁰ Oscar Landi, *El discurso sobre lo posible (La democracia y el realismo político)*, Buenos Aires, Estudios CEDES, 1985.

¹¹ Jorge Tula, “El neoliberalismo es más que una receta”, *La ciudad futura*, núm. 20, Buenos Aires, diciembre 1989-enero 1990.

y el uso ideológico de la dicotomía Estado-sociedad facilitó la instrumentación de profundas medidas de reordenamiento económico.

La esfera estatal quedó asociada al despilfarro de recursos, al mal manejo de los bienes nacionales y a las relaciones paternalistas entre funcionarios y ciudadanos. Amputar lo que se interpretaba como una ingerencia excesiva del gobierno en ámbitos que debían ser competencia de lo privado, pareció natural a los ojos de la opinión pública.

Este énfasis en la promoción de las iniciativas de la sociedad, más que un reconocimiento de las potencialidades autogestionarias de los trabajadores por cuenta propia y de los pequeños productores, está destinado a crear un auditorio de apoyo para el programa modernizador en grupos sociales con escasa integración y preferencias políticas difusas. Sobre estos sectores se impulsan estrategias de cooptación con objeto de obstaculizar y diluir la resistencia de aquellos sindicatos o fuerzas políticas que expresan las preocupaciones de los obreros o empresarios castigados por el proceso de reestructuración económica.

La corrección de ciertas insuficiencias identificadas como graves por el conjunto de la sociedad, como la mala prestación de algunos servicios de interés general o la administración poco transparente de los recursos, fue utilizada para estructurar un discurso que manifiesta privilegiar lo "social" y crea el espejismo de una participación privada más democrática en la esfera pública. Lo que en realidad se encubre es la cooptación de la población más pobre mientras avanza las medidas de reordenamiento productivo, se agota la capacidad de respuesta de los sindicatos y se debilita a los sectores empresariales con menores posibilidades de adaptación al cambio.

La conformación de un polo contestatario pierde así perspectiva y cuando confluyen fuerzas sociales y políticas disconformes, vacían su impulso inicial en reclamos puramente gremiales o detrás de propuestas que guardan más relación con un periodo histórico ya superado, que con los desafíos que se derivan de la actual estrategia de apertura y globalización de las economías nacionales.

Crisis de representatividad ¿desencanto de la política?

Con notable similitud y en poco más de diez años pudo presenciarse la

repentina mutación de antiguas fuerzas de raíz nacionalista-popular en complacientes partidos neoliberales.

El MNR de Paz Estenssoro o el MIR de Paz Zamora, que justificó su nacimiento para impulsar la lucha armada en Bolivia, el Partido Colorado de Julio Sanguinetti o el Blanco del presidente Lacalle en Uruguay, los restos debilitados del APRA peruano, el peronismo de Carlos Menem en Argentina y el PRI mexicano, modernizado por los dos últimos gobiernos, tienen poco que ver con la pujanza nacionalista que como convergencias populares se les conoció hasta hace poco tiempo.¹²

Todos ellos han sometido a sus partidos o movimientos a una peligrosa pérdida de identidad. La descomposición o el brusco reordenamiento de las coaliciones que sostuvieron en su momento a las diversas expresiones del “Estado de Bienestar” los puso en la encrucijada de tener que atrincherarse, reforzando los componentes más sustantivos dominantes en los países centrales. La opción fue una especie de huida hacia adelante, se decidió mudar de discurso y de programas antes que tener que definir cambios radicales pero de signo distinto.

Las capas dirigentes modernizadoras procedieron entonces a desarticular, desde el poder, la ideología y la organización social propias del periodo en que se constituyó el bloque popular y por lo general lo hacen a nombre de ese mismo pasado. El viraje histórico se efectúa a trasmano y disimulado en los laberintos de un discurso que yuxtapone viejas consignas con una nueva nomenclatura.

Las antiguas formas de representación se debilitan y los grupos sociales que habían acudido al sindicato o a los líderes políticos regionales como una forma de hacer conocer sus demandas, encuentran ahora una expresión menos fiel de sus intereses o espacios más reducidos para plantear sus reclamos.

El caso de los partidos políticos es similar. La imposición de un modelo de desarrollo que exige fuertes sacrificios materiales los obliga a pagar el costo del desconcierto y del escepticismo de las bases sociales que habían constituido su principal pivote y el elemento más importante de su legitimación ante el conjunto de la sociedad.

La declinación relativa de los partidos “populares” como forma de

¹² Walter Cancela y Jorge Notaro, “Política económica y actores sociales. El caso uruguayo”, *Los actores socioeconómicos del ajuste estructural*, Buenos Aires, vol. 4, CLACSO, 1989.

mediación de los intereses de los trabajadores recorre de diversas maneras a todos los países del continente. El tránsito de los antiguos mecanismos de representación a las nuevas formas de elaborar y ejecutar la política, muestra a veces perfiles grotescos. Elementos que por su naturaleza son relativamente marginales al discurso político, adquieren centralidad en un periodo de transición en el que lo “nacional-popular” es abandonado por obsoleto y los nuevos paradigmas de la modernidad no terminan de ser asimilados por la sociedad.

El desencanto por las agrupaciones políticas tradicionales trata de ser moderado con la incorporación de ciertas figuras que, si bien son un tanto ajenas al quehacer partidario, aparecen como portadoras de valores fuertemente acreditados en la sociedad. La familia, el esfuerzo individual como vía de superación, la solidaridad con parientes y vecinos y el espíritu emprendedor, ocupan en el discurso de la modernidad el papel central que antes le correspondió a consignas más globales, con un tono y una densidad política más fuerte, en particular el nacionalismo, la pertenencia a las clases populares y la defensa del patrimonio público.

No es azaroso que en casi todos los casos de movimientos nacionales en tránsito hacia posiciones neoconservadoras se haya estimulado la participación de artistas, animadores de radio y televisión, deportistas o de gente vinculada simplemente a la defensa del ambiente o preocupados por el reordenamiento de la vida urbana.

En esencia, lo que se busca es remontar el desencanto por la política que acompaña esta etapa de cambio con la incorporación de exponentes de una cultura de consumo fácil y de fuerte atractivo para el sentido común.

En Perú durante el proceso electoral de 1989, el empresario y animador de televisión Ricardo Belmont ganó con el 40 por ciento de los votos la presidencia municipal de Lima. En otro nivel, más determinante, las candidaturas de Collor de Mello en Brasil, la de Carlos Menem en Argentina, la de Vargas Llosa y la formación de la insólita coalición “Cambio 90” de Alberto Fujimori en Perú, están vinculadas a un mismo interés: el de presentar ante el electorado imágenes que —al menos en las formas— se muestran alejadas de la política tradicional.¹³ Existe una desconfianza

¹³ Javier Echeverría Iguiñiz, “Proyecto nacional, situación económica y política de ingreso en el Perú”, *Los actores socioeconómicos...* vol. 4, *op. cit.*

colectiva creciente frente a los antiguos partidos, frente a las instituciones y en general con respecto a los dispositivos de la formalidad democrática.

Esta insatisfacción tiene expresiones preocupantes en algunos países. En Argentina después de una transición angustiosa de la dictadura al régimen constitucional se produjo un rebrote de agrupaciones neofascistas que resultaron triunfantes en importantes distritos electorales. Con un mensaje mesiánico y antipolítico, candidatos surgidos del pasado gobierno militar supieron ganar la simpatía de los votantes prometiendo limpieza en las calles y plazas, mejoras en la administración de las provincias y municipios y moralización de la vida ciudadana.¹⁴

Los casos del general Bussi en la provincia de Tucumán, ex gobernador de esa entidad por mandato de la dictadura de Videla y del Movimiento por la Dignidad Nacional del coronel "cara-pintada" Aldo Rico, que se constituyó en poco tiempo en la tercera política del país, son ejemplos que ilustran la disgregación de ciertos grupos sociales y la necesidad de buscar nuevas instancias de representación política que manifiestan estos sectores de la población.

Los candidatos de los años ochenta representan, de manera directa o mediatizada, una sustitución gradual de la centralidad del discurso por la del gesto y la imagen. El papel abrumador de la televisión comercial para exaltar programas y acciones de gobierno y fortalecer la figura de los mandatarios es una constante de las administraciones de los presidentes que accedieron a sus puestos en los últimos cinco años.

En México la marcada identificación de la televisión privada con la figura del presidente Salinas contribuyó a difundir las obras de gobierno y explica, en buena medida, el repunte del partido oficial en las elecciones para elegir diputados del 18 de agosto de 1991, así como el renovado prestigio del titular del Poder Ejecutivo en sectores sociales que habían sido adversos al PRI en julio de 1988. Sin embargo, el levantamiento campesino en Chiapas volvió a poner en entredicho los logros del proyecto económico salinista y le quita capacidad de negociación al gobierno en vísperas de concluir su administración.

El considerable espacio de maniobra del mandatario argentino Carlos Menem para fragmentar a la posición y la resonante victoria del Partido Justicialista en las elecciones legislativas del 3 de octubre de 1993 se ex-

¹⁴ Juan Carlos Portantiero, "¿Crisis de la política?", *La ciudad futura*, núm. 20, *op. cit.*

plican, en gran parte, por el uso sistemático de la televisión para acrecentar el temor de la población de que se repitiera un nuevo brote inflacionario, como el que se vivió en 1989 y por el éxito de la política de estabilización de precios que aplicó el ministro de economía, Domingo Cavallo.

El panorama que ofrecen las fuerzas contestatarias es más patético. La izquierda en particular quedó atrapada en su propia dialéctica. Después de muchos años de practicar cierta "estadolatría" y de sostener, de manera poco crítica, las bondades de la empresa pública, debe pagar ahora tributo por los fracasos de una experiencia en la que no participó y de la que se convirtió en una difusora de buena fe.¹⁵ El colapso de los "socialismos reales" en la URSS y en Europa del Este le es achacado al pensamiento marxista latinoamericano como si hubiese tenido la responsabilidad directa en el diseño de esos modelos de partido único y de economía centralizada. Como agravante, los pocos intentos de impulsar propuestas "autogestionarias" o de fomentar el "consejismo" obrero no pasaron de ser ensayos embrionarios, apenas la sombra de los intentos que llevó a cabo la izquierda extraparlamentaria europea durante los años setenta.

La respuesta popular a los programas de ajuste y a las políticas de reestructuración productiva parece estar siendo expresada con mayor eficacia por los espacios reivindicativos que generan los llamados "nuevos movimientos sociales" que por las instancias que ofrecen los agrupamientos propiamente políticos como son los partidos. La multiplicación de organismos en los que habitantes de zonas urbanas marginadas, grupos feministas o ecologistas, comunidades étnicas o minorías sexuales plantean sus demandas o canalizan sus luchas, son una prueba de la dificultad que tienen las fuerzas políticas tradicionales para incorporar a sus filas y saber expresar los reclamos y necesidades de importantes sectores sociales. Si los antiguos partidos políticos no han sabido —o no han podido— ampliar sus estructuras y propuestas para dar "contenido y expresión" a grupos que emergen con especial vigor en el escenario de las luchas sociales, es lógico que estos segmentos de la sociedad se manifiesten a través de aquellos ámbitos que generan mecanismos de re-

¹⁵ Lucio Oliver, "El difícil retorno del Ave Fénix", revista *Acta Sociológica*, vol. iv, núm. 1, México, UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, enero-abril 1991.

presentación más directos y espacios organizativos menos burocratizados.

En medio de esta crisis de representatividad surgieron, no obstante, nuevos partidos y movimientos políticos que es justo consignar. En casi todos los casos son la expresión de una combinación de fórmulas políticas y denuncias y reclamos sociales que se condensan en un programa más abarcador e "inclusivo". De algún modo, con estas propuestas se pretenden crear contrapesos a las instituciones oficiales y en algunos países verdaderas opciones democráticas, frente a la secuela de efectos sociales desintegradores que está dejando la estrategia de reestructuración económica.

Aunque las tendencias que se señalan son comunes, hay matices importantes en la composición y el mensaje de estos nuevos movimientos políticos. El Frente Grande que encabeza el diputado peronista Carlos Álvarez en Argentina carga su discurso en la denuncia de la corrupción y en el cuestionamiento de las arbitrariedades y despropósitos del gobierno del presidente Menem. La victoria de esta agrupación en la ciudad de Buenos Aires en las elecciones del 10 de abril de 1994 para decidir sobre la reforma constitucional puede entenderse como la manifestación del "desencanto" y del fastidio de un amplio sector de la vasta clase media de esa ciudad ante el desaseo administrativo de las autoridades "menemistas".

El liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas y el surgimiento del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en México, tiene otras bases y responde más nítidamente al problema de la democracia en este país y al reclamo de los sectores populares—incluidos los jornaleros agrícolas y los pequeños productores del campo— sobre cuestiones como salarios, empleo, ayuda crediticia, crisis de las economías regionales y carencia de seguridad social.

El tema de la democracia—después de más de sesenta años de gobierno de un solo partido— constituye un aspecto medular de la propuesta del PRD. La depuración del padrón de votantes, la elaboración y distribución de credenciales para ejercer el derecho al voto y la limpieza de los procesos electorales, son algunos de los puntos centrales de la convocatoria con que este partido invita a la sociedad mexicana a participar en la defensa de los derechos ciudadanos. La elección presidencial del 21 de agosto de 1994 puede representar un punto de quiebre—de avance o de

estancamiento— con respecto a la presencia de este partido en la vida política de México.

Con más énfasis en lo social que en lo político, el Partido de los Trabajadores (PT), encabezado por *Lula* en Brasil, es otro ejemplo de la emergencia de una agrupación partidaria a partir de sectores sociales que no se sienten expresados por las antiguas fuerzas políticas. La procedencia sindical de su máximo líder y el contenido “obrerista” de su discurso le aseguran el apoyo de un numeroso auditorio entre los trabajadores industriales de los grandes centros urbanos del país. También tiene las simpatías de los pobladores de las barriadas marginales y “fabelas” de Río de Janeiro y San Pablo, aunque no ha logrado aún arraigar entre los habitantes pobres del campo y de las regiones más atrasadas de Brasil.

Los tres ejemplos que se mencionan constituyen un intento —todavía embrionario en algunos casos— de impulsar la consolidación de una instancia política que sirva de representación para los sectores y grupos sociales excluidos por el modelo de desarrollo vigente.

No obstante, puede afirmarse que, por el momento, el vacío de opciones alternativas deja un enorme espacio para que el proyecto neoliberal se ofrezca como un puerto seguro frente a las turbulencias que acompañan la construcción de un nuevo sistema económico internacional. Como si se tratara de un horizonte cargado de certezas, parece calmar la angustia que se genera en las clases dirigentes necesitadas de un refugio intelectual frente al derrumbe de los paradigmas a los que se había acudido para explicar la formación de las sociedades latinoamericanas.¹⁶

El enorme reto del pensamiento progresista es que no debe entregar las armas ante el avance neoconservador, pero a la vez no puede generar respuestas que se conciban a la sombra de consignas agotadas y de experiencias fallidas. Este es el drama de la izquierda latinoamericana: tener que romper con lo más negativo de la tradición socialista autoritaria y formular una propuesta de cambio que, aunque no esté a la orden del día, no contribuya ni sea cómplice de aquellos que por oportunismo o claudicación se han dedicado a proclamar las bondades del modelo neoliberal y a embellecer el capitalismo.

¹⁶ Ugo Pipitone, “La tercera oleada”, *La Jornada*, México, 11 de junio de 1991.